



ARGENTINA DE REGRESO AL FMI. NEOLIBERALISMO, CRISIS Y DISPUTAS SOCIALES



Dossier N°10 del Tricontinental
Noviembre de 2018

Argentina en el Fondo

En los primeros días de mayo de 2018 ante las dificultades de contener el aumento del precio del dólar, el presidente argentino Mauricio Macri anunció públicamente el inicio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Argentina volvía así a buscar un acuerdo con el FMI tras 15 años del último. Esta decisión implicó también poner fin a un primer periodo de la política gubernamental impulsada desde fines de 2015 bautizada como “gradualismo”.

Sin embargo, la negociación con el FMI, lejos de resolver la crisis, la profundizó. Entre principios de mayo y octubre el peso argentino se devaluó casi un 100%; la inflación se aceleró superando en septiembre el récord del 2002; la actividad económica se desplomó y entró en una cada vez más acentuada recesión; la pobreza, el desempleo y la precarización laboral crecieron; y el ajuste del gasto público en las áreas sociales se aceleró contribuyendo al deterioro de la educación, la salud y el desarrollo productivo soberano. La Argentina se hundió en el pantano de una nueva crisis económica y social que rememoró a otras del pasado reciente.

Bajo el despliegue de la crisis, en junio se aprobó un primer acuerdo *Stand-By* con el FMI y en septiembre, tras un nuevo cimbronazo devaluatorio, se renegoció de urgencia uno nuevo que amplió el financiamiento y lo adelantó. Entre uno y otro,

el gobierno se comprometió a eliminar drásticamente el déficit fiscal primario, dispuso la supresión de los Ministerios de Salud y de Trabajo reduciéndolos al rango de secretarías y se propuso reducir la emisión monetaria a cero, entre otras medidas.

La productividad de la crisis para acelerar las políticas de ajuste no pudo ser más evidente. La crisis societal que la aplicación de esas políticas generó, construyó las condiciones para profundizar ese mismo rumbo. Para muchos, esto es una característica propia del neoliberalismo.

Pero la dinámica de la crisis supuso también otras dimensiones y procesos: reordenamientos en las instituciones estatales y representaciones políticas; en los sectores dominantes; en el hacer y pensar de los sujetos populares; en la conflictividad social y política. Este dossier elaborado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social reflexiona sobre las diferentes dimensiones de la crisis, las disputas y los horizontes que plantea. Al final del mismo, pueden consultarse otras referencias que sirven para profundizar estos señalamientos.



Wacha

El gobierno de Cambiemos y la construcción de la crisis

En diciembre de 2015 asumió la presidencia Mauricio Macri luego de doce años de los gobiernos de signo neodesarrollista de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En el contexto de la ofensiva neoliberal que se despliega en los últimos años en Nuestra América (ITIS BsAs, 2018; Seoane, 2018), el giro conservador en Argentina se realizó a través de elecciones. Ello marcó también una novedad en la historia del país. Por primera vez, a través del sufragio universal y secreto, una alianza político-partidaria colocó a personal mayoritariamente vinculado a las grandes empresas en puestos de control del aparato de Estado, por ello su gobierno fue bautizado como “ceocracia” (Katz, 2015). Lo nuevo de esta derecha se expresó también en el apoyo de los grandes multimédios y en el uso de las modernas tecnologías de la propaganda, el marketing y las redes sociales; para lo que contó incluso, con la intervención de *Cambridge Analytica* en la campaña de 2015. Por otra parte, a diferencia de los años '90, la aplicación de esta política de transformaciones neoliberales no tuvo lugar en un contexto mundial de incremento de los flujos financieros, de inversiones y comerciales presentes en la llamada globalización posterior a la caída del muro de Berlín ni supuso tampoco una derrota previa o desestructuración profunda de los sujetos subalternos.

Esto explica las particularidades que asumió el rumbo del nuevo gobierno en su primer periodo. Así, la caída del poder

adquisitivo de los salarios en 2016 fue importante pero no drástica (aproximadamente un 6% promedio) y el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y el desempleo apareció más como producto de la inflación (que alcanzó un 40,3%) y la recesión (-2,3% del PBI) o como responsabilidad del gobierno anterior que como resultado inevitable de las medidas oficiales de desregulación del tipo de cambio, de los flujos financieros y comerciales, y de precios. En el mismo sentido, la reforma tributaria a favor del gran capital (disminución o eliminación de las retenciones a las exportaciones) y el pago a los fondos especulativos transnacionales poseedores de bonos de deuda se financió con un significativo crecimiento de la deuda externa. Ello le permitió al oficialismo, mantener sin cuantiosos recortes las políticas sociales anteriores y postergar las transformaciones estructurales más agresivas requeridas por la agenda neoliberal.

Asimismo, se benefició también a las actividades extractivas, simbolizadas en las reiteradas menciones al campo (especialmente, la gran agricultura transgénica) y la explotación del yacimiento de hidrocarburos no convencionales (fracking) de Vaca Muerta de la provincia de Neuquén, considerados como unos de los motores del pretendido desarrollo económico y la atracción de inversiones. De esta manera, los principales favorecidos por estas políticas permiten identificar a los sectores dominantes del bloque en el poder: el sistema financiero; las corporaciones (transnacionales y locales) del sector energético; el agronegocio y el extractivismo en general; incluso algunos grandes grupos económicos locales,

particularmente los conglomerados mediáticos.

Una mejora de la situación económica durante 2017 (estimulada, entre otros factores, por un crecimiento del gasto público) y una campaña electoral vehiculizada por los grandes multimedios y las redes sociales basada en la diferenciación respecto del gobierno anterior (presentado como autoritario y corrupto), le permitió al oficialismo ganar las elecciones parlamentarias de octubre. En los días posteriores al triunfo, el presidente Macri anunció una serie de ambiciosas reformas legislativas y regulatorias –en lo laboral, previsional, tributario y fiscal, electoral, de la justicia– orientadas a avanzar más profunda y rápidamente en la agenda neoliberal. Sin embargo, de todas estas reformas la única que logró aprobación parlamentaria en diciembre de 2017 fue la reforma previsional. Esto sucedió en el marco de masivas movilizaciones y protestas, violenta represión policial y una verdadera batalla campal que asoló las inmediaciones del Congreso. En esos mismos meses, las agencias financieras internacionales comenzaron a advertir sobre las crecientes limitaciones para sostener el ritmo del endeudamiento externo de los llamados países emergentes y particularmente de la Argentina en un contexto de redireccionamiento de los flujos financieros hacia EE.UU. Seis meses más tarde, la economía argentina entró en un círculo sostenido de devaluación del peso, fuga de capitales e inflación que puso fin al “gradualismo” para promover las condiciones de un shock de ajuste.



Bárbara Leiva/Patria Grande

El ciclo de la especulación financiera, la crisis y el FMI

El “gradualismo” no solo profundizó los problemas económicos ya presentes en el gobierno anterior (inflación, déficit fiscal), también, acentuó el estrangulamiento externo del país. Contrariamente a las promesas de convertirnos en el supermercado del mundo, la liberalización y desregulación del sector externo supuso un incremento de las importaciones que dio lugar a uno de los déficits comerciales más grandes de la historia. En la misma dirección, contrariamente a las promesas de lluvia de inversiones, el incremento de la remisión de utilidades por parte de las empresas extranjeras y la fuga de capitales fogueada por la especulación profundizó el déficit en la balanza de pagos.

Frente a estos procesos, el crecimiento de la deuda externa jugó un papel central para evitar durante un tiempo tres tipos de consecuencias: la caída de las reservas del Banco Central; contener las renovadas expectativas de devaluación; y proveer justamente los dólares para convalidar la fuga de capitales y cubrir el déficit fiscal. En esta dirección, entre 2016 y 2017 la deuda externa se incrementó sustantivamente llegando a representar el 53% del PBI. Se construía así una bomba económica que podía explotar en cualquier momento al tiempo que con las políticas de liberalización y desregulación se privaba al Estado de las herramientas para controlarla.

En abril del 2018, finalmente la mecha de la bomba se encendió. La anunciada suba en la tasa de interés de Estados Unidos terminó por generar una seguidilla de corridas cambiarias hacia el dólar que impuso una devaluación del peso. Luego de descoordinadas y fallidas intervenciones del Banco Central (que implicaron una considerable pérdida de reservas), el gobierno decidió acudir en mayo al FMI. En este sentido, la crisis no fue el resultado de una tormenta externa, como lo pretendió justificar el gobierno, sino de una política que profundizó los problemas estructurales del capitalismo dependiente a partir de una serie de cambios en beneficio del capital más concentrado.

Por otra parte, la negociación con el FMI tampoco se trató de la imposición de una política de ajuste rechazada por el gobierno aunque supuso cambios de poder al interior del mismo. Así, por ejemplo, el anuncio previo al acuerdo del Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne de reducir la obra pública indicó que el gobierno ya había elegido dejar el “gradualismo” y profundizar el ajuste. Por otra parte, la constante pérdida de reservas y las magras y descoordinadas intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario sin ningún éxito en contener el valor del dólar parecen haber sido hechas más en beneficio de ciertos grupos especulativos y/o para justificar la intervención del FMI responsabilizando del ajuste a causales o culpables externos. Esto se combina con que la decisión del apoyo del Fondo no es puramente técnica; se trata en este caso de sostener a un gobierno –y a una experiencia de transformación económica– que es considerado punta de lanza

de la ofensiva neoliberal en la región.

En este contexto, en junio se firmó el primer acuerdo *Stand By* con el FMI por un préstamo de 50.000 millones de dólares extendido en 36 meses en base a un plan económico que estableció la reducción del déficit primario a cero en 2020 y el fortalecimiento de la autonomía del Banco Central. Sin embargo, pocos meses después, tuvo lugar una nueva corrida cambiaria. A fines de agosto, el peso se devaluó casi un 15% en un día, la tasa de interés alcanzó el 60% y el riesgo país los 780 puntos. Bajo la presión de la crisis, se negoció el segundo acuerdo que incrementó el monto del préstamo y, fundamentalmente, adelantó una parte sustantiva del mismo al periodo de gobierno que le resta a la coalición oficialista. Los compromisos gubernamentales asumidos en este segundo acuerdo profundizaron los anteriores respecto de la reducción del déficit fiscal (el llamado déficit cero se anticipó para 2019, previendo para el 2020 incluso un superávit del 1% del PBI). Asimismo implicó una drástica reducción de la emisión monetaria afirmando la opción de una salida recesiva para controlar la inflación. Y se modificó la política del Banco Central con la flotación libre del dólar con bandas y la emisión permanente y con vencimientos de corto plazo de letras del tesoro (Leliq) con tasas de interés muy altas (actualmente superiores al 70%). El acuerdo se completó con una mayor injerencia del FMI en la determinación de la política económica y con una reorganización del gabinete que reforzó el peso de los ministros más confiables para el Fondo. Aún más, el FMI cuenta hoy con personal permanente instalado en una oficina

en la sede del Banco Central de la República Argentina. Por otra parte, la voluntad oficial de recortar el gasto público se visualizó en la reducción del rango de los Ministerios de Salud y Trabajo al nivel de Secretarías de Estado.

La historia de la Argentina reciente ofrece valiosas lecciones de lo que implican estos acuerdos con el FMI. Diferentes gobiernos argentinos firmaron tres Stand By en la década de 1980; dos en los años 90 sumados a dos más en virtud de los Acuerdos de Facilidad Ampliada; otro Stand By en 2001 y otro en 2003. Todos repiten el mismo y falaz diagnóstico. Plantean que hay una demanda excesiva (consumo), resultado de lo que se considera un elevado gasto público. En este marco, para acceder al préstamo, el FMI impone un ajuste de dicho gasto para, a su vez, garantizar el pago de la deuda. Se trata así, más que de la reducción del gasto, de su reorientación. El presupuesto para el 2019 presentado por el gobierno es muestra de ello: pues, por una parte, propone recortes en la inversión efectiva prevista en salud, educación, políticas sociales y subsidios, al tiempo que prevé una duplicación de los egresos destinados al pago de la deuda. En este sentido, por más que el FMI ha hecho cierto esfuerzo en diferenciarse del set de medidas tradicionales, los parámetros fijados no han salido de lo habitual.

Por otra parte, los efectos de las medidas de ajuste y austeridad que solicita el FMI para garantizarse el repago de la deuda también son muy conocidas. El ajuste acentuará la contracción de la actividad, disminuirá la recaudación y se reducirá nuevamente el gasto público. El ajuste se profundizará y la

economía entrará en una fase recesiva (como se está viendo en este tercer trimestre del año) con más desempleo, precarización y pobreza. Esta suerte de callejón de ajuste permanente va a suponer un altísimo costo social para el pueblo, con menos educación, menos salud, menos empleo, menos políticas sociales, menos ciencia y tecnología. No hay que ir muy lejos para saberlo: a la Argentina de fines de 2001 o a la Grecia reciente (Katz, 2018). Una economía en recesión con más desempleo y menos generación de excedente en un mundo que se encuentra bajo guerras comerciales, tiene como resultado más próximo, como veremos en los puntos siguientes, un acrecentamiento de la disputa por el excedente entre los sectores dominantes y una creciente conflictividad social y política.



Tristán Basile/Patria Grande

La dinámica de la crisis en los sectores dominantes

Analizar los cambios que atraviesan a los sectores dominantes (del poder económico) en el marco de la crisis actual nos lleva necesariamente a considerar algunos elementos de procesos similares del pasado. La salida de la anterior crisis del año 2001 implicó que los sectores productivos conquistaran un lugar de privilegio dentro del bloque de los sectores dominantes, mientras que aquellos vinculados a las finanzas, la oligarquía pampeana y los servicios públicos privatizados quedaron relativamente desplazados, con un rol secundario en lo político aunque con un peso importante en lo económico (Schorr, 2018). En el marco de estas tensiones, a partir del 2008 y, particularmente del 2012, con el surgimiento y acentuación de la crisis global, las fracciones más concentradas de los sectores dominantes ligadas a los intereses agrarios, financieros, del gran capital industrial transnacional y de servicios comenzaron a construir una alternativa al proyecto neodesarrollista. Ese sector del gran empresariado logró imponer una agenda al interior del bloque en el poder que tenía como puntos clave: la reducción de costos, sobre todo salariales; la competitividad externa; mayores facilidades para el capital financiero; ajustes en las rentabilidades relativas de los sectores de servicios y energía; y, como demanda más bien ideológica, desterrar las identidades políticas “populistas” en pos de una “previsibilidad republicana” (López, 2018).

El éxito de este proyecto del gran capital dependía de las tensiones y límites surgidos al interior del propio orden social forjado por los gobiernos kirchneristas. Como ya señalamos, la restricción externa; la inflación (que impidió tanto la consolidación de una redistribución progresiva de ingresos como una competitividad estable para los sectores productivos del capital); la reaparición del déficit fiscal y un virtual estancamiento del PBI, fueron condiciones propicias para que este sector se impusiera al interior del bloque en el poder como hegemónico y expresara esa capacidad de liderazgo a través de la conformación de espacios empresariales que directamente abonaron a la política llevada adelante por el nuevo gobierno a partir del 2015 (López y Cantamutto, 2018).

Luego del acceso al poder estatal, Cambiemos tomó las decisiones a la medida de estos sectores del empresariado: devaluación acelerada del peso en favor del gran capital exportador, ajuste feroz en las tarifas de servicios públicos para beneficiar a los sectores no transables, liberalización de los controles de cambios y aumento superlativo de las tasas de interés que cuadruplicó las ganancias de los bancos y el capital especulativo transnacional. El problema central de esta estrategia para una acumulación sostenida es que dependía de condiciones internacionales que ya no estaban vigentes; por el contrario, como ya señalamos, hoy se acentúa el flujo del capital financiero de la periferia hacia el centro.

En este marco, el estallido de la crisis a partir de abril de 2018 implicó la reafirmación de la posición dominante del capital

que apuesta a las finanzas. Así, la crisis fortaleció al interior del bloque dominante al sector de los bancos y los brokers de la bolsa de valores integrando a las mega-corporaciones productivas que hoy prefieren diversificar su cartera en activos financieros que le rinden tres o cuatro veces más que su actividad principal. En este sentido, las finanzas no refieren sólo a un sector del empresariado sino también a una lógica de operación económica en la que pueden participar los sectores del gran capital e incluso, en ciertos rubros y a veces como ilusión ideológica, también los medianos y hasta los pequeños ahorristas.

Con la crisis de abril y el primer salto en la devaluación del peso se manifestaron los efectos del tridente de políticas económicas que favorece a este bloque del gran capital financierizado: una política monetaria restrictiva (con altas tasas de interés), la liberalización de la movilidad del capital especulativo a corto plazo y la flotación completa del tipo de cambio. Por supuesto, esto es un desfaldo de las arcas estatales sin precedentes inmediatos; debemos pensar en los años de la dictadura cívico-militar para encontrar un punto de comparación acorde.

Desde esta perspectiva la dinámica de la crisis económica, al reforzar el papel dominante del capital financiero, planteó tensiones y validó hegemonías al interior del bloque de los sectores dominantes. Por un lado, con el empresariado productivo que fue quien tuvo un lugar de privilegio en el plano de la política estatal durante los gobiernos kirchneristas. Si bien este sector comenzó a plantear críticas al orden

económico forjado por la ofensiva neoliberal, su debilidad estructural y sus decisiones de apoyar al gobierno en 2015 implicaron poca capacidad para desmarcarse de la estrategia del gran empresariado financiarizado y transnacionalizado. Por otro lado, las políticas monetarias, cambiarias y fiscales que el gobierno propuso para resolver la crisis, acentúan la percepción de que el poder de lobby del gran capital financiarizado es insoslayable. Ello sin embargo no significa que detente una capacidad absoluta para imponer sus intereses. La crisis también intensifica las disputas al interior de los sectores dominantes por la distribución de los excedentes. En ese sentido, las propuestas impulsadas por el FMI de restablecer o incrementar los impuestos (retenciones) a las exportaciones o los impuestos a los bienes personales para mejorar los ingresos fiscales y garantizar, entre otras cuestiones, el pago de la deuda externa chocaron con la resistencia del complejo agroexportador que logró, al interior de la coalición gobernante, morigerar o licuar estas iniciativas. Por último, el inicio en el marco del surgimiento y despliegue de la crisis económica de la causa judicial conocida como “Causa de los Cuadernos” supuso la acusación y/o procesamiento de importantes e históricos empresarios ligados a la obra pública incluidos muchos de los que conformaban el núcleo más importante de los llamados grupos económicos locales. El hecho histórico de más de dos decenas de grandes empresarios interpelados por los tribunales tiene efectos en la competencia intercapitalista que, aún con insondables derivaciones, parece favorecer a ciertos grupos empresarios locales y al capital transnacional.

Con todo, las diferentes tensiones al interior del bloque dominante intensificadas en el marco de la crisis no se han transformado en disputas abiertas. Ante esta situación, las políticas que impulsa el sector que conduce el bloque dominante, con un gobierno completamente heterónimo a esa conducción y bajo el control que ejerce el FMI suponen una recesión de gran envergadura para reducir la inflación, pulverizar el salario en dólares, y profundizar la intervención sobre nuestra economía del capital financiarizado transnacional. En este esquema, no debe resultarnos extraño que Larry Kudlow, director del Consejo Económico de la Casa Blanca, haya planteado hace unos meses que la solución para la crisis argentina pasa por ligar el peso con el dólar. Ello deja entrever que hay negociaciones acerca de una reestructuración monetaria que suponga un modelo de convertibilidad fija peso-dólar, o incluso aunque menos probable, una dolarización de nuestra economía. Pero ciertamente ello es una opción que dependerá de la evolución y dinámica que adquiera la crisis en el futuro y de cómo ello incida en las tensiones al interior de los sectores dominantes que analizamos. Un proceso que no se da en el vacío sino que se expresa también en el campo de las representaciones políticas y el Estado y sobre el que incide la acción y luchas de los sujetos populares. Examinemos estas dimensiones más de cerca.



Bárbara Leiva/Patria Grande

¿De la crisis de la política a la crisis política?

La aplicación de las transformaciones neoliberales en la época del gradualismo y la profundización del ajuste con la llegada de la crisis se apoyaron en una construcción ideológica que articuló diferentes narrativas, algunas forjadas en los años previos y otras que actualizaron identidades liberales del pasado. Narrativas que interpelan y buscan reconfigurar las subjetividades sociales surgidas frente a una crisis estatal y social que las propias transformaciones neoliberales promueve y acentúa. Y hacen ello a partir de un arsenal de tecnologías de propaganda y comunicación con la acción coordinada de los grandes grupos multimedias e importantes equipos de intervención en las redes sociales. El carácter y diversidad de estos dispositivos y estrategias, utilizados de forma combinada, son un pequeño ejemplo de los recursos que despliega la ofensiva neoliberal a nivel regional y global (Ceceña, 2013; Boron, 2012; Korybko, 2018).

Así, la justificación de las políticas de ajuste como correcciones necesarias a los “derroches del populismo” del gobierno anterior se utilizó también para buscar convencer a los sectores medios y trabajadores de la imposibilidad de vivir por encima de las posibilidades individuales. En esa dirección, el propio gobierno afirmó la importancia de sustentar el cambio económico con un cambio cultural en el cual los sujetos son autorresponsabilizados por su suerte ante los ajustes

considerados necesarios e inevitables y donde se promueven las figuras del emprendedor y del empresario de sí mismo (Murillo, 2018a).

Por otra parte, la lucha contra la corrupción se transformó en una bandera central del gobierno cuando la crisis se profundizó, con el inicio de la llamada “Causa de los cuadernos” a principios de 2018 y que, de modo similar al “Lava Jato” brasileño, sindicaba una asociación ilícita entre empresarios locales y funcionarios del gobierno anterior en el financiamiento de la obra pública, incluida la ex presidenta Fernández de Kirchner que es amenazada, por esta y otras causas, con la prisión preventiva. Ciertamente la corrupción entre Estado, política y poder económico tiene una historia tan larga como la del mercado, y ha sido también una herramienta propia de los grupos económicos locales para defender sus intereses. Por contrapartida, las banderas de la anticorrupción conforman uno de los núcleos discursivos de los organismos internacionales de las últimas décadas en la interpelación y empoderamiento de la sociedad civil como sustento de las transformaciones neoliberales de cara y contra el Estado.

Pero ello no significa que estas transformaciones sean contradictorias con la corrupción; en los años '90 marcharon estrechamente unidas, en la actualidad altos funcionarios del propio gobierno están acusados de esos mismos delitos. La mentada lucha contra la corrupción, asociada a un tratamiento punitivo, de mano dura y socialmente discriminatorio (del delito y del delincuente) estimuló procesos de violencia

intersubjetiva, xenofobia y fascistización social. Los mismos, ante la posibilidad de una profundización de la crisis y lo sucedido en las elecciones en Brasil, incitan el juego político de algunos sectores del poder (del propio gobierno y otros sectores conservadores) que ven factible apostar a la construcción de un “Bolsonaro” a la Argentina.

En esa clave, la gestión de la nueva derecha implicó también una renovación de los mecanismos de coerción. Por una parte, la promoción de causas judiciales (en asociación con servicios de inteligencia y grandes medios) sobre ex funcionarios, dirigentes sociales y sindicales; una práctica que ha sido llamada “lawfare” o judicialización de la política y que se caracteriza por transformar el derecho penal liberal al aplicar la prisión sin completar el proceso judicial y sin condena firme. Por otra parte, avanzó el reforzamiento y modernización del aparato represivo y a partir del 2017 se verificó un incremento de la política represiva; tanto sobre los pueblos mapuche del Sur del país que costó la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, como en las movilizaciones de las grandes ciudades y en las barriadas populares. En similar dirección, los iniciales intentos de disminuir las condenas a los crímenes de lesa humanidad de la pasada dictadura militar se proyectaron a mediados del 2018, cuando la crisis ya estaba iniciada, en el decreto presidencial que avanzó en la habilitación de la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden doméstico, de acuerdo con las recomendaciones promovidas por los EE.UU.

Todos estos breves señalamientos, dan cuenta de que la

reformulación de la relación entre Estado y mercado que promueve el neoliberalismo es también un proceso de desdemocratización y desnacionalización del Estado, de las formas de gobierno y la sociedad, como sucedió en los años '90. Al mismo tiempo, señala las particularidades que, en este proceso, caracteriza a la ofensiva neoliberal actual, con sus dimensiones de violencias, autoritarismos y modelos securitarios y de excepción (Boron, 2003; Quijano, 2000; Murillo, 2018b).

Por otra parte, la acentuación de la crisis económica y social ha tenido también efectos en la disminución del apoyo social al gobierno aunque hoy todavía éste parece alcanzar, según encuestas recientes, cerca de un tercio de la población. Pero la tendencia decreciente del sustento social gubernamental ha estimulado la aparición pública de tensiones, conflictos y reacomodamientos en las instituciones y representaciones políticas; al interior del Poder Judicial, con iniciativas diversas de reorganización de fuerzas en el campo de la oposición partidaria e incluso al interior de la propia coalición gobernante entre sus máximos referentes y partidos. Una dinámica estimulada y orientada hacia las próximas elecciones presidenciales de octubre del año próximo. Este horizonte electoral sin embargo no supone clausurar la posibilidad de que el malestar social y la profundización del ajuste no desemboquen antes en una crisis política, en particular, si se acentúa el deterioro de la situación económica. En esta dirección, la conflictividad social ha crecido a lo largo del 2018 respecto del año anterior y, en particular, se ha intensificado desde el inicio del periodo de la

crisis como veremos en el punto siguiente. En relación con esto, es necesario no olvidar que la experiencia de los movimientos populares del pasado reciente en Nuestra América construyó una propuesta de resolución de la crisis neoliberal del Estado y la política a partir de una transformación institucional profunda basada en una ampliación de la democracia en clave protagónica, participativa y directa.



Bárbara Leiva/Patria Grande



Bárbara Leiva/Patria Grande

Los sujetos populares y la conflictividad social

Ni el crítico escenario económico, ni la intensificación de la represión, deben hacernos perder de vista que la movilización popular tiene un peso específico y una resistente capacidad de marcar agendas. Cuatro paros generales con total adhesión de los sindicatos más importantes del país, inmensas movilizaciones y paros laborales de mujeres, y un sinnúmero de protestas sectoriales y sociales han marcado las calles de la Argentina de 2016 a esta parte. Sin dudas, la heterogénea, desigual y combinada lucha callejera es una de las formas de expresar el descontento de los sectores populares. Ahora bien, esto no se ha traducido directamente en la construcción de un bloque político-electoral que logre por sí mismo canalizar el mismo descontento en las urnas. Fuerza callejera, sólida y heterogénea organización gremial y social, y dispersión política puede bien ser la síntesis que describa la situación del campo popular argentino.

El pasado 25 de septiembre la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó al segundo paro general de este 2018, el cuarto desde 2016. La medida tuvo un masivo acatamiento, logró expresar un rechazo a las políticas de ajuste y endeudamiento, al tiempo que condensó en una sola medida la creciente movilización nacional por renegociación de los salarios. Confluyeron las ramas de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y las organizaciones de la Confederación

de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Las tres herramientas sindicales más importantes del país, que agrupan a las diversas formas del trabajo, hicieron parte de la huelga general. Es que el mapa sindical argentino es tan complejo como fragmentado. Desde 2003, el porcentaje de sindicalización creció para llegar hoy a rondar el 37% por lo cual, Argentina continúa siendo uno de los países con mayor tasa de sindicalización, comparada con el promedio de 25% en Sudamérica. Por otra parte, existen hoy tres centrales sindicales, la CGT, la CTA y la CTEP, cada una asociada a un momento histórico y a una forma de trabajo. Al mismo tiempo, todas cuentan con corrientes internas o fracturas (como es el caso de la CTA, hoy dividida en tres vertientes) y expresiones políticas que van desde la izquierda hasta la ortodoxia peronista. Y aunque ninguna apoya públicamente el modelo económico de Cambiemos, sus métodos varían desde el silencio expectante hasta la confrontación abierta, expresando posiciones que van desde sectores negociadores hasta los radicalmente críticos.

Jorge Duarte, especialista en temas gremiales, afirma que es el movimiento obrero industrial del interior el que hoy mantiene un perfil más combativo y unitario. En las zonas industriales de Córdoba, Santa Fe y el Gran Buenos Aires la creciente ola de despidos, cesantías y cierre de fábricas, provocó masivas movilizaciones con cortes de ruta. Por ejemplo, el sector de Metalúrgicos declaró que en cinco meses tuvieron 3 mil despidos y 10 mil suspensiones; en Córdoba, los automotrices ya cuentan 4 mil suspensiones y estiman una reducción del

50% en su capacidad productiva. En todos estos casos, una agudización de la crisis social aumentó la conflictividad y los niveles de coordinación entre las corrientes gremiales. Tal perfil sindical confrontativo comenzó a presionar a sus conducciones nacionales, hasta este año abanderadas de una “oposición dialoguista” hacia el gobierno. En este proceso, la CGT hoy se ve atravesada por el fortalecimiento de una línea más confrontativa representada por la Corriente Federal de Trabajadores y el Sindicato de Camioneros, que han lanzado actualmente, el Frente Sindical para el Modelo Nacional. Con la consigna “La patria está en peligro”, el Frente aparece como un actor político-sindical que busca trascender la resistencia callejera en miras de participar de un armado electoral para 2019.

Al mismo tiempo, los últimos meses estuvieron marcados por la movilización de diversos gremios asociados al trabajo en el área pública agrupados en la CTA, y hoy profundamente afectados por el vaciamiento de diversas áreas estatales y las negativas a la negociación de salarios acordes a la inflación. Durante el mes de agosto, los docentes universitarios encabezaron una lucha por aumentos salariales y presupuestarios; a ella se sumaron luego lxs estudiantes con ocupaciones en más de 10 universidades del país, que tuvo uno de sus momentos de cierre más importantes en una masiva manifestación nacional. Asimismo, los sindicatos de docentes y trabajadores de la educación protagonizaron una serie extendida de conflictos y movilizaciones, particularmente en la Provincia de Buenos Aires; y los médicos y trabajadores de la salud impulsaron diferentes protestas conformando un

movimiento multisectorial amplio por el derecho a la salud que promovió la marcha federal en defensa de la salud pública; así también importantes luchas se dieron en la administración pública contra los despidos y las políticas de ajuste.

Para completar el mapa de la conflictividad gremial, un tercer actor es clave, el “otro” movimiento obrero. Se trata de aquellos trabajadores excluidos de la economía formal, despojados, y desde 2010 agrupados en la CTEP, llamada por algunos, la “CGT de los excluidos”, de los trabajadores precarios y de subsistencia. Una expresión de cómo se ha fragmentado y reorganizado el mundo del trabajo bajo el capitalismo neoliberal. Ahora bien, para este “otro”, el 2018 fue un año cargado de multitudinarias marchas (como la Marcha Federal por Tierra, Techo y Trabajo y la vigilia del 8 de agosto, Día de San Cayetano) y una serie de logros. Entre ellos, el aumento del monto del Salario Social Complementario (de 4.400 pesos en diciembre de 2017 a 6.000 pesos) o las conversaciones para poner en pie circuitos de reciclaje urbano con inclusión social aún en un contexto de profundización de la pobreza. Por otro lado, las numerosas declaraciones públicas y encuentros entre la CTEP y algunos sectores de la CGT señalaron la puesta en discusión de la gremialización de los trabajadores excluidos. En la coyuntura actual se reactualizó también la discusión acerca de la relación entre lo gremial y lo político. Desde sus inicios, la CTEP buscó priorizar su anclaje sindical antes que las pertenencias político-ideológicas. En ese marco, llevó adelante la construcción de alianzas sectoriales con otras organizaciones, como la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, el llamado “tridente de

San Cayetano”. La asunción del gobierno de Cambiemos y la distinción en la ofensiva neoliberal de un “enemigo común”, potenciaron la exploración de expresiones políticas en torno a la economía popular y otros sectores afectados por las políticas del gobierno.

Poco entenderíamos de las características de la movilización de este 2018 si no tuviéramos en cuenta las luchas de las organizaciones feministas. Desde el 3 de junio del año 2015, el movimiento feminista y de mujeres viene creciendo en radicalidad y masividad. Ese día, “Ni Una Menos” fue la consigna que logró masificar el repudio a las violencias machistas en Argentina. En octubre de 2016, las mujeres realizaron el primer paro general contra el gobierno de Macri; la medida se volvió internacional con el “Paro Internacional de Mujeres”, articulación que hoy vincula a mujeres de 200 ciudades del mundo. Luego, buena parte de este 2018 estuvo marcado por la lucha por la legalización del aborto que, la noche del 8 de agosto convocó a casi 2 millones de personas en las calles de Buenos Aires. Los tres procesos de activación sintetizan un fenómeno masivo: el cambio de percepción sobre la violencia machista, sobre la desigualdad entre géneros y sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y deseos. Las protagonistas de este fenómeno son, sin dudas, las jóvenes y adolescentes, de aquí que Luciana Peker (2017) hable de la “revolución de las hijas”. Podemos decir que este proceso constituye una “nueva ola” feminista, y que la articulación internacional de la acción directa y las demandas, es uno de sus datos centrales. El otro dato está dado por el hecho de que

muchos de los hitos de esta “cuarta ola” (el #Metoo o el #Elenao, por caso) tienen a los gobiernos neoliberales y conservadores, a sus medidas o discursos retardatarios, como interlocutores centrales. Volviendo a Argentina, cabe decir que, además de las jóvenes, son las mujeres de los sindicatos, y las de todos los partidos políticos y movimientos sociales, incluso actrices y trabajadoras de la cultura, las que han dado fuerza a este movimiento social, tan heterogéneo como masivo. Nadie desconoce, sin embargo, que dentro de dicho movimiento conviven diversas estrategias políticas y corrientes, y que hoy es un interrogante abierto el cómo se traduce políticamente dicha potencia.

Dilemas del futuro próximo

Hasta aquí hemos reseñado las diferentes dimensiones y tensiones que asume la crisis que se despliega hoy en Argentina y que, lejos de estar concluyendo, parece encontrarse en un periodo inicial. Hacia adelante, en relación con la situación económica, el pronóstico más optimista prevee una progresiva pero lenta disminución de las altas tasas de inflación actuales. Esto, en un contexto recesivo que se prolongaría posiblemente hasta principios del segundo trimestre del año próximo. Pero, desde otras perspectivas, se señalan los límites que tiene una política antiinflacionaria de carácter recesivo, particularmente respecto de servicios y bienes cuyos precios se fijan en mercados monopólicos. Por otra parte, la política de nuevo endeudamiento público en pesos a altas tasas de interés expone otra vez a la economía argentina a cualquier cambio de los flujos financieros internacionales que pueden derivar en un nuevo ciclo de corrida cambiaria, devaluación y salto inflacionario. Si ello sucediera, no es imposible la precipitación de una crisis política que modifique el horizonte electoral del próximo año y las reconfiguraciones en curso actualmente al interior del amplio y diverso campo de la oposición política y del oficialismo que hemos examinado.

Sin embargo, aún en el contexto de merma del apoyo social, el gobierno consiguió la aprobación del presupuesto público del 2019 en la Cámara de Diputados, un presupuesto elaborado en

base a los compromisos asumidos con el FMI y que plantea, como ya señalamos, una sensible reducción del gasto público social con el llamado “déficit o”. Esta validación parlamentaria gracias al voto de un sector de las bancadas no oficialistas (integrantes del Partido Justicialista y de partidos provinciales) tuvo lugar mientras que en las calles adyacentes del Congreso las fuerzas de seguridad dispersaban y perseguían a las columnas de organizaciones gremiales, sociales y políticas que se estaban manifestando contra dicho presupuesto en una reedición de lo sucedido con la reforma previsional a fines de 2017.

En este sentido, la dinámica de la situación política a futuro estará condicionada también por la acción que puedan desplegar los sujetos populares y sus diferentes organizaciones; particularmente, si el malestar social resultado de la combinación de inflación y recesión de los próximos meses se traduce en procesos de activación social amplia y convergente. Como hemos señalado, en el contexto de la crisis del 2018, la conflictividad social se intensificó y emergieron experiencias diversas de articulaciones, en la calle y entre organizaciones. Sin embargo, más allá de poner ciertos límites o conseguir ciertos logros particulares, este periodo de luchas sociales no supuso un bloqueo a las políticas de ajuste promovidas por el gobierno. Tampoco hoy ha surgido una fuerza unitaria que, desde el plano de la política y las urnas, represente una oposición clara a las políticas neoliberales en curso con capacidad de disputar electoralmente el gobierno. Estas tensiones se proyectan como interrogantes hacia el futuro próximo.

Finalmente, en una perspectiva más larga, las transformaciones estructurales que llevan adelante las políticas neoliberales del gobierno y, en particular, el enorme y gravoso endeudamiento externo, suponen un fuerte condicionamiento que se proyecta más allá de las próximas elecciones presidenciales de octubre del 2019 y que alimenta las expectativas de los sectores dominantes de que, llegado el caso, se produzca un cambio de signo político sin un cambio de políticas. Ello supone un desafío particular para los movimientos populares.

El despliegue de la ofensiva neoliberal a nivel regional y global parecen resaltar la estrecha vinculación entre los procesos de concentración del ingreso y la riqueza, el deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas sociales, y la reconversión de la democracia y el derecho liberal en regímenes autoritarios, militarizados y de violencia social. La urgencia de la defensa de la vida democrática y de las condiciones de la dignidad humana plantea para las perspectivas críticas también la necesidad de profundizar y reinventar radicalmente los horizontes emancipatorios.





Bárbara Leiva/Patria Grande

Bibliografía

Belloni, Paula y Wainer, Andrés (2018). ¿Lo que el viento se llevó? La restricción externa en el kirchnerismo. En Schorr, Martín (comp.). *Entre la década ganada y la década perdida. La argentina kirchnerista. Estudios de economía política*. Buenos Aires: Editorial Batalla de Ideas.

Boron, Atilio (2003). *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*. Buenos Aires: Clacso.

Boron, Atilio (2003). *América Latina en la geopolítica del imperialismo*. Buenos Aires: Ed. Luxemburg

Ceceña, Ana Esther (2013) *La dominación de espectro completo en América Latina*. Disponible en <http://www.geopolitica.ws/document/la-dominacion-de-espectro-completo-sobre-america/>

ITIS BsAs (Instituto Tricontinental de Investigación Social, oficina Buenos Aires) 2018 Documento de trabajo N° 1 “La ofensiva neoliberal en Argentina. Apuntes para una caracterización”, mimeo ITIS BsAs (Instituto Tricontinental de Investigación Social, oficina Buenos Aires) 2018 Debate de Coyuntura: Crisis en la Argentina actual. Disponible en https://gallery.mailchimp.com/6a79324d3b4acfde1e7e546c6/files/8a65d99f-0245-4384-840f-55565ec12d8b/Debates_de_coyuntura_la_crisis_en_Argentina.pdf

Katz, Claudio (2015). La Ceo-cracia en acción. Disponible en <https://katz.lahaine.org/la-ceocracia-en-accion/>.

Katz, Claudio (2018) “Al borde del abismo”. Disponible en <https://katz.lahaine.org/b2-img/ALBORDEDELABISMO.pdf>

Korybko, Andrew (2018). *Guerras híbridas – das revoluções coloridas aos golpes*. San Pablo: Expressao Popular.

López, Emiliano (2018). Qué fue de la hegemonía desarrollista? Tiempos de transición y nuevas posiciones al interior del bloque de poder en Argentina. *Cuadernos de Economía Crítica*; Vol. 4, Nro 8, 15 - 41.

López, Emiliano y Cantamutto, Francisco (2018). El orden social kirchnerista entre la economía y la política. En Schorr, Martín (comp.) Entre la década ganada y la década perdida. *La Argentina kirchnerista. Estudios de economía política*. Buenos Aires: Editorial Batalla de Ideas.

Murillo, Susana (2018a) “Construcción de hegemonía y procesos de subjetivación en el arte de gobierno neoliberal”. En Guido Galafassi y Florencia Ferrari (Compiladores) *Disputas, Hegemonía y Subjetividad*, Ranelagh: Extramuros Ediciones, Theomai, GEACH.

Murillo, Susana (2018b) “Democracia, neoliberalismo y estado de Excepción”. En Melisa Campana y José G. Giavedoni (Comps.) *Estado, gobierno y gubernamentalidad. Neoliberalismo y Estado de excepción en Nuestramérica*. Rosario: Pegues.

Peker, Luciana (2017) *La revolución de las mujeres*. Villa María: EDUVIM.

Quijano, Aníbal (2000) “Colonialidad del poder, globalización y democracia”. Disponible en <https://rrojasdatabank.info/pfpc/quijano2.pdf>

Schorr, Martín (2018). *Entre la década ganada y la década perdida. La Argentina kirchnerista*. Buenos Aires: Editorial Batalla de Ideas.

Seoane, José. (2018). “Ofensiva neoliberal y resistencias populares: una contribución al debate colectivo sobre el presente y el futuro de los proyectos emancipatorios en Nuestra América”. En José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati *Movimientos sociales e internacionalismo en Nuestra America. Del ciclo de conflictividad y cambios sociopolíticos a la ofensiva neoliberal actual*. Buenos Aires. Ed.Luxemburg. Disponible en <http://gealyc.blogspot.com/>

Foto de portada : *Wacha somos un colectivo de intervención artística en el espacio público con base en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Nuestras obras son colectivas porque las producimos en el diálogo con otro/as, pero sobre todo, porque en ellas retomamos luchas históricas que nos trascienden, y las entregamos a la calle para que sean tomadas e interpretadas. Wacha construye identidad a partir de la cultura popular y del movimiento feminista, de lo nacional y lo latinoamericano, buscando que la creatividad sea crítica, organizada y transformadora, que el arte sea de la calle.*

Facebook: [WACHA](#) | Instagram [@cortewacha](#)



Tricontinental: Institute for Social Research
*is an international, movement-driven institution
focused on stimulating intellectual debate that serves
people's aspirations.*

www.thetricontinental.org

Instituto Tricontinental de Investigación Social
*es una institución promovida por los movimientos,
dedicada a estimular el debate intelectual al servicio
de las aspiraciones del pueblo.*

www.eltricontinental.org

Instituto Tricontinental de Pesquisa Social
*é uma instituição internacional, organizado por
movimentos, com foco em estimular o debate
intelectual para o serviço das aspirações do povo.*

www.otricontinental.org